

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA LAS
ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS; AUTORIDAD DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
PUERTO RICO

Peticionarias

v.

LUMA ENERGY, LLC; LUMA
ENERGY SERVCO, LLC

Recurridas

JENNIFFER GONZÁLEZ
COLÓN, GOBERNADORA DE
PUERTO RICO; GOBIERNO DE
PUERTO RICO

Peticionarios

v.

LUMA ENERGY, LLC; LUMA
ENERGY SERVCO, LLC

Recurridas

AUTORIDAD PARA LAS
ALIANZAS PÚBLICO
PRIVADAS; AUTORIDAD DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

Recurridas

CT-2025-006
cons. con
CT-2025-007

CERTIFICACIÓN
INTRAJURISDICCIONAL
PROCEDENTE DEL TRIBUNAL
DE PRIMERA INSTANCIA, SALA
SUPERIOR DE SAN JUAN,
CASO TPI NÚM. SJ2025CV11093
cons. con CASO TPI NÚM.
SJ2025CV11202

SOBRE:
SENTENCIA DECLARATORIA,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
ENTREDICHO PROVISIONAL

PRESENTADO
SECRETARÍA
TRIBUNAL SUPREMO
2026 OCT - 5 A 9:58

**MOCIÓN PARA QUE SE TOME CONOCIMIENTO JUDICIAL DE DOCUMENTOS
OMITIDOS POR LAS PETICIONARIAS EN VIRTUD DE LAS REGLAS 31 Y 50
DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO**

AL HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO:

COMPARECEN las demandadas-recurridas LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Servco, LLC (en conjunto, “LUMA”), por conducto de la representación legal que suscribe, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente exponen, alegan y solicitan:

I. TRASFONDO PROCESAL

1. En el día de hoy, LUMA presentó su *Alegato en Oposición* en el caso de epígrafe. La presente moción se presenta conjuntamente con dicho Alegato, el cual remite a ésta y a sus respectivos anejos, sujeto a lo que este Honorable Tribunal resuelva respecto a la presente solicitud. Mediante Resolución de 5 de agosto de 2026, este Honorable Tribunal expidió

ambos recursos de certificación intrajurisdiccional, ordenó su consolidación y dispuso que, “[a]demás de exponer los méritos de su reclamación, las partes peticionarias deben abundar con precisión sobre los remedios o el proceso de transición que tendría lugar en caso de prevalecer en su contención”. Resolución de 5 de agosto de 2026, pág. 2. Las Peticionarias presentaron sus alegatos el 4 de septiembre de 2026.

2. Desde que presentaron sus respectivas demandas y durante todo el transcurso de los recursos consolidados de epígrafe, las Peticionarias han mantenido deliberadamente fuera de los autos dos documentos de gran pertinencia para los asuntos planteados ante este Ilustre Foro, a pesar de que la Minuta Núm. 2022-17 de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (“P3A”, por sus siglas en inglés) sobre la reunión en la que se aprobó la Carta-Extensión objeto de controversia (“Minuta”) hace referencia directa a ambos documentos y los discute como parte esencial de las bases de la votación que se llevó a cabo y la decisión que se tomó. La Minuta consta como Anejo 5 de la Demanda de la P3A y la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”).
3. El primer documento, que acompaña esta moción y se identifica como **Anejo I**, es el Memorando de la Gerencia de la P3A a su Junta de Directores titulado *Implications of Failing to Extend the Interim Period Termination Date under the Supplemental Agreement*, preparado, como refleja la Minuta, en respuesta a la solicitud del Director Lassús Ruiz. En éste, la Gerencia informó a la Junta que la no extensión activaría un *Operator Termination Fee* de aproximadamente \$121,785,000 bajo el Contrato Suplementario, con tratamiento de gasto administrativo en el caso de Título III de la AEE y cuyo pago tendría prioridad sobre el de los acreedores existentes; que seguiría un periodo de transición de salida de hasta doce meses, compensado a base de horas trabajadas al costo de las tarifas por hora más diez por ciento (10%) y el reembolso de costos razonables; que habría que celebrar una nueva licitación para contratar a un nuevo operador privado, la cual sería costosa y de resultado incierto, en un mercado que en el 2019 produjo solamente dos licitadores; y que la terminación conllevaría riesgos concretos para el caso de Título III de la AEE, para los fondos federales de reconstrucción y para los procesos regulatorios ante el Negociado de Energía, entre otras complicaciones.
4. El segundo documento, que acompaña esta moción como **Anejo II**, es un escrito de opinión legal de la firma Pietrantoni Méndez & Álvarez, LLC a la P3A, fechado el 28 de noviembre

de 2022 y titulado *P3 Authority Approval Requirements for the Extension of the Interim Period Termination Date*. Sus conclusiones fueron que la extensión de la fecha de terminación del periodo interino no constituye una aprobación nueva bajo el Art. 9(g)(iii) de la Ley 29-2009; que la Sec. 10(b) de la Ley 120-2018 no le aplica; que la aprobación de la P3A no es requerida por una ley, sino que la exige el propio contrato, por ser la P3A parte en su capacidad de Administrador; y que basta para esa aprobación la mayoría simple de la Junta. En otras palabras, los asesores legales externos de la P3A concluyeron, en noviembre de 2022, esencialmente lo mismo que LUMA sostiene hoy ante este Honorable Tribunal.

5. La P3A anejó la Minuta a su Demanda en el caso SJ2025CV11093 (págs. 437-447 del Apéndice de su Petición ante este Tribunal), pero omitió incluir entre sus anejos los referidos documentos que la propia minuta identifica que fueron circulados para discutirse en la mencionada reunión de la Junta. Posteriormente volvió a omitirlos del recurso de certificación y su apéndice, así como de su alegato, a pesar de que uno de estos documentos incluso responde puntualmente a lo que este Honorable Tribunal ordenó abordar con precisión en su Resolución del 5 de agosto de 2026 en cuanto a los remedios o el proceso de transición. Esa omisión reiterada no es una mera inadvertencia, pues tales documentos incluyen, entre otras cosas, admisiones y declaraciones contrarias al interés de la propia parte peticionaria, que desacreditan la teoría de su Demanda. En particular, el memorando de su Gerencia cuantifica los remedios y las implicaciones económicas que su Junta tuvo ante sí al votar a favor de la extensión en noviembre de 2022, los cuales el Alegato de la P3A ni tan siquiera discute, y la opinión legal de sus asesores legales externos concluye precisamente que la extensión que esa misma entidad gubernamental ahora impugna no requería los trámites que hoy alega que faltaron.
6. Como podrá colegir este Ilustre Foro, la Minuta que forma parte del Apéndice de los recursos consolidados de epígrafe identifica de manera específica ambos documentos con fecha, autor y propósito. En esta se hizo constar que, cerca de las 2:10 p.m. del 28 de noviembre de 2022, la Gerencia de la P3A proveyó a los Directores una opinión legal sobre los requisitos de aprobación aplicables a la extensión, particularmente la aplicabilidad de la Ley 120-2018. También indica que el Director Lassús Ruiz solicitó a la Gerencia un resumen de las implicaciones y consecuencias de no extender el Contrato Suplementario,

y que al día siguiente la Gerencia confirmó haberlo producido y compartido, al igual que la opinión legal. A su vez, se hizo constar la aseveración de la Gerencia, en respuesta a preguntas de un Director, de que, fuera de los documentos referidos en la reunión, no había documentos adicionales que no se hubieran provisto a los Directores. La Minuta también hizo constar que el Presidente de la Junta votó a favor de una recomendación sustentada por la opinión legal, reflejada en los documentos presentados a la Junta. Por lo tanto, es incuestionable que ambos documentos existen y obran en los archivos de la P3A, por lo que estos constituyen documentos públicos a tenor de la normativa aplicable.

7. Aun cuando no incluyó los referidos documentos, la P3A descansa sobre esa minuta en su alegato. La cita para sostener que su Junta “concibió la extensión como una simple prolongación administrativa” (*Alegato de la Parte Peticionaria P3A*, pág. 6); la invoca para establecer la abstención de dos de sus Directores y solicita que se tome conocimiento judicial de ésta y de otras fuentes ajenas al apéndice de su recurso de certificación intrajurisdiccional (*Íd.*, págs. 5, nota 12, y 11, nota 20). Es decir, la P3A le solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento judicial y lea el acta de la deliberación de dicha reunión, pero no le muestra los documentos sobre los cuales, según la propia minuta, se deliberó y se tomó la decisión que es objeto de controversia en el presente caso.
8. La parte recurrida es consciente de que la Regla 34(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, limita el contenido de los apéndices a los documentos que formen parte de los autos del Tribunal de Primera Instancia. Por eso no incluyó estos documentos en el apéndice de su alegato y presenta esta moción, al amparo de las Reglas 31 y 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, para que se tome conocimiento judicial de ambos documentos conforme a las Reglas 103(C) y 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, o, en la alternativa, para que se consideren parte integral de la Minuta en la que están incorporados por referencia en virtud de la Regla 108 de Evidencia, *supra*, y que demuestra que estos se tienen que estudiar para tener una noción clara del asunto presentado. Dado el estado procesal del recurso certificado, sin que se hubiese celebrado un descubrimiento de prueba que hubiera permitido obtenerlos y presentarlos ante el foro primario, esta moción es el único cauce disponible para traerlos a la atención de este Honorable Tribunal.

II. CARÁCTER PÚBLICO DE LOS DOCUMENTOS

9. En nuestro ordenamiento jurídico, un documento público es todo el que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado en el manejo de los asuntos públicos. Art. 3(p) de la Ley Núm. 107-2025, también conocida como la Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI; *Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera López*, 207 DPR 200, 207-211 (2021). En lo pertinente a la presente solicitud, este Honorable Tribunal ha resuelto que las resoluciones de la Junta de Gobierno de la AEE, así como toda la documentación recibida o generada por dicha corporación pública, son documentos públicos por tratarse de documentos generados en el manejo de asuntos públicos, y que el ciudadano ni siquiera tiene que explicar para qué los solicita. Véase *Engineering Services International, Inc. v. AEE*, 205 DPR 136, 152-153 (2020). Con mayor razón lo son las comunicaciones de la Gerencia de una entidad gubernamental a su Junta de Directores, y de sus asesores legales a esa Junta, sobre la contratación del operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica del País, el asunto público por excelencia de la pasada década.
10. Más aún, la Ley 141-2019, también conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a Información Pública, dispone que toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, “aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero”, se presume público. Art. 3, 3 LPRA sec. 9913. La presunción no depende, pues, de en manos de quién esté la copia. Depende de dónde se originó, recibió o conservó el documento y de qué asunto trata.
11. Determinada la naturaleza pública del documento, corresponde al Estado que pretenda mantenerlo fuera del alcance del escrutinio probar, de forma precisa e inequívoca, la aplicación de una de las excepciones reconocidas, bajo un escrutinio estricto en el cual “no bastan meras generalizaciones” y en el cual la balanza se inclina a favor del acceso a la información pública. *Kilómetro 0 v. Pesquera*, *supra*, págs. 210, 216-218; *Nieves v. Junta*, 160 DPR 97, 104 (2003). Aquí ni siquiera se trata de un ciudadano que exige acceso a información en poder del Estado: se trata de documentos que ya acompañan esta moción, generados o recibidos por una entidad gubernamental, sobre la controversia misma que esa misma parte trajo a los tribunales y que son documentos a los que esa parte hizo referencia para basar sus alegaciones al incorporar la Minuta a su reclamación. La deliberación que

esos documentos informaron culminó hace casi cuatro años en un contrato otorgado y ejecutado. Por lo tanto, no queda proceso deliberativo alguno que proteger en esta etapa de los procedimientos.

12. Ahora bien, y aun si se entendiera que alguno de estos documentos en algún momento estuvo cobijado por algún privilegio, lo cual se niega, en todo caso este fue renunciado por la P3A. La Regla 517(a)(2) de Evidencia, *supra*, dispone que renuncia a cualquier privilegio quien, sin mediar coacción y con conocimiento del privilegio, “divulgó cualquier parte del asunto o materia” o permitió su divulgación por otra persona. La P3A presentó junto con su Demanda una Minuta que divulga la existencia de la opinión legal, su fecha, quién la pidió, el tema sobre el cual versa y su conclusión. Asimismo, su Director Ejecutivo y su Gerencia expusieron ante la Junta, para récord, la misma tesis jurídica que la opinión legal recoge, y ello quedó registrado en la Minuta que la P3A unió a su Demanda y consta en el expediente ante este Tribunal, junto con el detalle de la deliberación que se llevó a cabo en relación con ese asunto.
13. A ello se suma la renuncia implícita que reconoce la Regla 517(b) de Evidencia, *supra*, pues la P3A invoca y discute la Minuta en su alegato para establecer cómo deliberó su Junta y pretende retener, al mismo tiempo, los documentos que esa minuta identifica como el sustento de la deliberación. La Minuta no puede usarse como espada y los documentos a los que se refiere como escudo.
14. Además, en cuanto al Anejo I, este solo describe las consecuencias contractuales principales que son el objeto mismo de este pleito. Cualquier reclamo de información oficial bajo la Regla 514 de Evidencia, *supra*, exigiría que la P3A pruebe que la divulgación está prohibida por ley o que tal divulgación “sería perjudicial a los intereses del gobierno”, prueba difícil de concebir cuando es el propio gobierno quien colocó esas consecuencias en controversia y cuando este Honorable Tribunal ordenó precisarlas. En todo caso, no se debe pasar por alto que los privilegios se deben interpretar restrictivamente. Véase Regla 518 de Evidencia. *Bhatia Gautier v. Gobernador*, 199 DPR 59, 89 (2017).
15. Es menester recordar, por último, que “toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere”. Regla 304(5) de Evidencia, *supra*. Nuevamente, la P3A tiene los documentos públicos que son objeto de esta moción, están identificados en la Minuta que radicó y optó por no presentarlos.

16. Por lo tanto, no hay impedimento legal alguno para que esta Curia los considere al adjudicar los asuntos en controversia a tenor de los mecanismos probatorios que se discuten a continuación.

III. PROCEDENCIA DEL CONOCIMIENTO JUDICIAL

17. Las reglas de conocimiento judicial “aplican en todas las etapas de los procedimientos” y el conocimiento judicial de hechos adjudicativos puede tomarse “en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la apelativa”. Reglas 103(C) y 201(e) de Evidencia. Este Tribunal ha tomado conocimiento judicial de hechos adjudicativos precisamente en el contexto de ciertos casos que fueron objeto de una certificación intrajurisdiccional. Por ejemplo, en *UPR v. Laborde Torres*, 180 DPR 253, 274-279 (2010), este Ilustre Foro tomó conocimiento judicial de la celebración de una asamblea estudiantil y de la aprobación de un voto de huelga, por tratarse de hechos no controvertidos y de fácil corroboración. Asimismo, en *Senado de P.R. v. Gobierno de P.R.*, 203 DPR 62, 67 (2019), tomó conocimiento judicial de hechos de conocimiento público no controvertidos.
18. La existencia y el contenido de los documentos anejados a esta moción son hechos susceptibles “de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada”. Regla 201(b)(2) de Evidencia, *supra*. La fuente de corroboración surge de la Minuta que la propia P3A presentó en autos, que los identifica con fecha, autor y propósito. Cuando la parte promovente provee la información necesaria para ello, el tribunal debe tomar conocimiento, especialmente si se trata de un hecho de fácil y precisa corroboración. Regla 201(c) de Evidencia; *Pérez v. Mun. de Lares*, 155 DPR 697, 705 (2001).
19. Tampoco existe obstáculo de prueba de referencia para tomar en consideración el contenido de los referidos documentos. En *UPR v. Laborde Torres*, 180 DPR en la pág. 279, este Ilustre Foro rehusó tomar conocimiento del contenido de artículos de prensa porque constituían prueba de referencia inadmisibles. Sin embargo, los documentos que aquí se acompañan no son recortes periodísticos, sino que se trata de los documentos oficiales y públicos, que contienen admisiones de la P3A, hechas por su Gerencia y por el asesor legal autorizado por dicha parte, y las cuales se ofrecen contra la P3A, por lo que no constituyen prueba de referencia. Regla 803(a), (c) y (d) de Evidencia.

20. Bajo cualquier supuesto, si la P3A entiende que los documentos anejados no son copias fieles de los que su minuta identifica, tendrá la oportunidad de así plantearlo dentro del término de diez días que provee la Regla 31(d) del Reglamento del Tribunal Supremo. Si la P3A objetara la autenticidad de los documentos anejados, este Honorable Tribunal puede ordenarle producir copias de las versiones oficiales que constan en sus récords, ya que estos documentos fueron producidos por o a solicitud de la P3A y están en su custodia.

IV. LOS DOCUMENTOS ANEJADOS DEBEN SER CONSIDERADOS EN CONJUNTO CON LA MINUTA QUE PRESENTÓ LA P3A CON SU RECLAMACIÓN

21. Existe un fundamento adicional e independiente por el cual esta Curia debe considerar los documentos aquí anejados al adjudicar los asuntos ante su consideración. La Minuta no se limita a recoger el resultado de una votación. Identifica de manera taxativa los documentos y la información que la Junta tuvo ante sí al momento de aprobar la Carta-Extensión. Ello vino acompañado de la aseveración de la Gerencia, que se hizo constar en la propia minuta, de que no había otros documentos, y remite a esos documentos como fundamento de la determinación que es objeto de la presente controversia. De ese modo, los referidos documentos están incorporados por referencia en la propia Minuta y forman parte integral del expediente administrativo que esa acta recoge.

22. Por consiguiente, se debe tener presente que la Regla 108 de Evidencia dispone que, cuando un escrito, o parte de éste, es presentado por una parte, la parte adversa puede requerir que se presente en ese momento cualquier otro escrito “que deba ser presentado contemporáneamente para la más cabal comprensión del asunto”. La P3A presentó la Minuta y solicitó que se tomara conocimiento judicial de dicho documento, pero se limitó a citarlo de manera selectiva y no incluyó los documentos que fueron incorporados a la misma y que la Minuta identifica como las bases de las determinaciones que se tomaron. Sin embargo, lo cierto es que, para entender cabalmente qué fue lo que su Junta evaluó y consideró en noviembre de 2022 respecto a las consecuencias de no extender, y sobre los requisitos legales de la extensión, resulta necesario examinar la totalidad de los documentos que el acta identifica como la base de dicha determinación.

23. En ese sentido, nada impide que el expediente administrativo de la P3A respecto a la aprobación de la Carta-Extensión, cuya autenticidad no es objeto de controversia,¹ sea

¹ Cabe notar que surge del expediente que las Peticionarias no han tenido reparo en remitir a este Honorable Tribunal otros documentos y fuentes que tampoco forman parte de los autos, incluyendo el registro de contratos de la Oficina del Contralor (Alegato de la P3A, págs. 6-7), entradas de SUMAC (Alegato de la P3A, pág. 11); páginas electrónicas

considerado en su totalidad por este Ilustre Foro al adjudicar los méritos de la controversia objeto de los recursos consolidados de epígrafe.

V. PERTINENCIA DE LOS DOCUMENTOS OMITIDOS POR LAS PETICIONARIAS

24. Finalmente, no se debe pasar por alto que este Honorable Tribunal ordenó a las Peticionarias que abundaran con precisión en su alegato sobre los remedios y el proceso de transición. En ese contexto, la pertinencia de los documentos omitidos y sobre los cuales solicitamos que se tome conocimiento judicial y que se consideren al momento de adjudicar los recursos consolidados de epígrafe no puede estar en controversia.
25. Particularmente, el memorando de la Gerencia sobre las implicaciones de no extender el periodo interino constituye el análisis contemporáneo que realizó la propia P3A sobre esos mismos asuntos al momento en que se aprobó la Carta-Extensión. En este se cuantifica el *Operator Termination Fee* de la Sección 7.2(c) del Contrato Suplementario, se describe la transición de salida y sus costos, y se ponderan de manera detallada las consecuencias regulatorias y fiscales de una terminación. Por ello, es evidente que la controversia sobre los remedios cuya discusión fue ordenada por este Ilustre Foro no puede resolverse en abstracción de un documento en el que la propia peticionaria cuantificó específicamente tales remedios.
26. De otra parte, la P3A arguye que la extensión careció de causa y que es difícil comprender qué interés público se pretendía proteger mediante dicha transacción. Sin embargo, lo cierto es que su propia Gerencia contestó esa misma interrogante, con cifras y detalles, desde noviembre de 2022 cuando esa misma parte aprobó la Carta-Extensión. Según se explica en dicho memorando, la extensión que fue refrendada evitaba un cargo de terminación que en ese momento era de \$121,785,000.00, una transición prolongada que hubiese estado sujeta a un costo considerable, un proceso de licitación incierto y la desestabilización del caso de Título III y de los fondos federales de reconstrucción, entre otros.
27. La opinión legal, a su vez, incide sobre la buena fe con la cual actuaron las partes y sobre el carácter no manifiesto del vicio que hoy se alega, asuntos pertinentes bajo el Art. 343

de la Junta de Supervisión Fiscal (Alegato del Gobierno, pág. 6), del Negociado de Energía de Puerto Rico (Alegato de la P3A, pág. 3) y del Departamento de Energía federal (Alegato del Gobierno, pág. 9) y la Minuta Núm. 2020-12 de la propia P3A, citada mediante un enlace de internet que no aparece en el apéndice (Alegato de la P3A, pág. 11 nota 20).

del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6313, respecto a la legitimación para reclamar la declaración de invalidez de un negocio jurídico supuestamente nulo.

28. Después de todo, la Junta de Directores de la P3A aprobó la extensión con el beneficio de una opinión legal de sus abogados externos que concluyó que ningún requisito de ley le aplicaba y particularmente no aplicaba la Sección 10(b) de la Ley 120-2018. Esa fue, en fin, la interpretación contemporánea de los requisitos de sus propias leyes habilitadoras por parte de la agencia que la Ley 120-2018 designó para estructurar e implantar las Transacciones de la AEE.

29. Por lo tanto, resulta imperativo que este Honorable Tribunal cuente con el beneficio de estos documentos al adjudicar las controversias ante su consideración.

POR TODO LO CUAL, LUMA solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que tome conocimiento judicial de la existencia y del contenido de los documentos que se acompañan como Anejos I y II y los considere al resolver la controversia de epígrafe; o, en la alternativa, que los considere parte integral de la Minuta Núm. 2022-17 (Exhibit 5 de la Demanda en el caso SJ2025CV11093) por estar incorporados por referencia a dicha minuta, en que se describen como base de las determinaciones tomadas en las reuniones cuya deliberación se recoge en la Minuta; con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICAMOS haber enviado copia del presente escrito en esta misma fecha por correo electrónico a la representación legal de las Peticionarias, a través del Departamento de Justicia, a: Lcda. Tania L. Fernández Medero, tfernandez@justicia.pr.gov, Lcdo. Samuel Wiscovitch Coralf, samuel.wiscovitch@justicia.pr.gov y samuelwiscovitch@hotmail.com, Lcda. Lorna M. Rivera Franco, lorivera@justicia.pr.gov, Lcda. Wilda T. Irizarry Toro, wilda.irizarry@justicia.pr.gov, Lcdo. Omar Andino Figueroa, omar.andino@justicia.pr.gov, Lcdo. Edwin Mojica Camps, edwin.mojica@justicia.pr.gov, Lcdo. Frank A. Rosado Méndez, frank.rosado@justicia.pr.gov y Lcda. Juliana N. Castro Ramos, juliana.castro@justicia.pr.gov; de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, a: Lcdo. Lionel E. Santa Crispín, lionel.santa@p3.pr.gov y lionel.santa@prepa.pr.gov; y de la Autoridad de Energía Eléctrica, a: Lcdo. Alexis G. Rivera Medina, alexis.rivera@prepa.pr.gov y agriveramedina@outlook.com; Lcdo. Juan M. Martínez Nevárez, jmartinez@gmlex.com; Lcda. Mirelis Valle Cancel,

mvalle@vcprlaw.com y mvalle@gmlex.net, y Lcdo. Roberto Abesada-Agüet,
rabesada@gmlex.net y ra@abesada.com.

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2026.



DLA Piper (Puerto Rico) LLC
B-7 Tabonuco Street, Suite 1501
Guaynabo, PR 00968
Tel. 787-945-9106 / 9122 / 9103
Fax: 939-697-6141 / 6092 / 6063

A blue ink signature of Margarita Mercado Echegaray, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Margarita Mercado Echegaray
RUA Núm. 16,266
Margarita.mercado@us.dlapiper.com

A blue ink signature of Mariana Muñiz Lara, featuring a stylized 'M' and 'L'.

Mariana Muñiz Lara
RUA Núm. 18,262
mariana.muniz@us.dlapiper.com

A blue ink signature of Emmanuel Porro González, with a circular flourish at the end.

Emmanuel Porro González
RUA Núm. 23,704
Emmanuel.porrogonzalez@us.dlapiper.com

A blue ink signature of Jan M. Albino López, written in a cursive style.

Jan M. Albino López
RUA Núm. 22,891
jan.albinolopez@us.dlapiper.com

Andréu & Torres-Viada

261 Avenida Domenech
San Juan, P.R. 00918-3518
Tel. (787) 754-1777
(787) 754-1102
Fax. (787) 763-8045

A blue ink signature of José A. Andréu Fuentes, with a large, sweeping 'J' and 'A'.

José A. Andréu Fuentes
RÚA Núm. 9,088
jaf@andreu-sagardia.com

A blue ink signature of Frank Torres-Viada, featuring a stylized 'F' and 'T'.

Frank Torres-Viada
RÚA Núm. 14,724
ftv@ftorresviada.com

A blue ink signature of Edgardo Rivera García, with a large, circular flourish.

EDGARDO RIVERA GARCÍA
RÚA Núm. 9149
erglegalconsultants@gmail.com
edgardoriveragarciajd@gmail.com
Calle Tetuán, Suite 2A-0012
San Juan, P.R. 00901
Tel. (787) 370-3146

A blue ink signature of Federico Hernández Denton, with a stylized 'F' and 'H'.

FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON
RÚA Núm. 3846
1404 Plantation Drive, Ph404
Dorado, P.R. 00646
(787) 505-9295
f.hernandezdenton@gmail.com



GOVERNMENT OF PUERTO RICO
PUERTO RICO PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AUTHORITY

TO: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AUTHORITY BOARD OF DIRECTORS

Re: Implications of Failing to Extend the Interim Period Termination Date under the Supplemental Agreement

Reference is made to the O&M Agreement¹ and Supplemental Agreement,² each by and among (i) the Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA"), (ii) the P3 Authority, (iii) LUMA Energy, LLC ("ManagementCo") and (iv) LUMA Energy ServCo, LLC (together with ManagementCo, "LUMA" and together with PREPA and the P3 Authority, the "Parties"). Capitalized terms used but not otherwise defined herein shall have the meaning ascribed to them in the O&M Agreement unless otherwise specified.

Following a request made by Mr. Julio Lassús, member of the Board of Directors ("Board") of the P3 Authority during the Board's meeting held on November 28, 2022, we have summarized below the consequences to the Commonwealth of Puerto Rico, PREPA and/or the P3 Authority (together, the "Government Parties") in the event the Interim Period Termination Date under the Supplemental Agreement is not extended and the Supplemental Agreement and the T&D Agreement are allowed to terminate.

Cost of Failing to Extend the Interim Period Termination Date under the Supplemental Agreement and Allowing the Supplemental Agreement and the T&D Agreement to Terminate.

- LUMA is entitled to an Operator Termination Fee of approximately \$121,785,000, which is the \$115,000,000 termination fee detailed in the Supplemental Agreement as adjusted to account for 2021/2022 inflation. Litigation surrounding the payment of such fee is likely.

¹ The Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement dated as of June 22, 2020 ("O&M Agreement"), pursuant to which the Parties (as hereinafter defined) contracted for LUMA to begin the operation and management of PREPA's T&D System after a Mobilization Period and upon satisfaction of certain conditions precedent to the Service Commencement Date.

² The Puerto Rico Transmission and Distribution System Supplemental Terms Agreement dated as of June 22, 2020 (the "Supplemental Agreement" and together with the O&M Agreement, the "T&D Agreements"), supplemented the O&M Agreement and allowed for LUMA to begin the operation and management of PREPA's transmission and distribution system (the "T&D System") on an interim basis notwithstanding that certain conditions precedent to the Service Commencement Date has not occurred (namely PREPA's emergence from its Title III process).

Back-End Transition Costs.

- LUMA is required to perform certain Back-End Transition Services for up to 12 months to assist in the transition of the T&D System to a new operator. As compensation for these services, LUMA is to be paid a Back-End Transition Service Fee, which is a function of hours worked and employees' hourly rates, plus 10% of their product, and all reasonable costs and expenses, without markup for profit.
- LUMA may seek to avoid providing any Back-End Transition Services, and it has little incentive to manage its costs efficiently.
- Back-End Transition Services would be limited to the "phasing out" of LUMA's operations in Puerto Rico and assisting in the transition of the T&D System unto a new operator. They will likely not cover LUMA's ongoing efforts for the reconstruction of the T&D System.

Identifying a Replacement Operator.

- Per Act 120 and Act 17, the P3 Authority will need to procure a new private operator of the T&D System after the termination of the T&D Agreement.
- A new procurement would be time-consuming and costly. The procurement process to select LUMA took almost 18 months.
- It is uncertain whether there would be interested market participants. As a matter of background, although four participants were pre-qualified for the first procurement process conducted by the P3 Authority to identify an operator for the T&D System, only two bids were received – one from LUMA and one from PSEG. The PSEG bid scored lower than LUMA's both with respect to financial and technical components, and the contract proposed by PSEG shifted a significant amount of risk to the Government Parties. In addition, if the O&M Agreement with LUMA is terminated after only 18 months, this will create uncertainty and speculation in the market, and private parties will likely be wary of participating in a new procurement process.
- To the extent that any private operators do participate, the terms and conditions of their bids will likely be much less favorable to the Government Parties than those agreed with LUMA (or even those proposed by PSEG), taking into consideration the fragility of the T&D System, contracting with a bankrupt counterparty, and other risks involved.
- In addition to the cost of the procurement process itself, installing a replacement operator would involve the cost of such operator mobilizing its team in the same manner as LUMA did, and the Government Parties would again incur in mobilization costs.

Impact on Title III Process.

- Bondholders have consistently expressed their loss of confidence in PREPA's ability to operate the T&D System and have indicated that a private party should operate the T&D System.

- Judge Laura Taylor Swain has indicated there will be "consequences" (i.e., receivership or dismissal) if the Financial Oversight and Management Board ("FOMB") is unable to propose a legitimate plan of adjustment by December 1, 2022, that will permit confirmation hearings to start in June 2023.
- The FOMB's December 1st deadline to propose a plan coincides with the Supplemental Agreement's expiration, and the FOMB's ability to propose a legitimate plan is contingent upon LUMA remaining in place as a stable operator of the T&D System; without LUMA, appointment of a receiver is highly likely, if not certain. Of note, bondholders recently asked the Title III Court to dismiss PREPA's bankruptcy proceedings as a step to appointing a receiver for PREPA. The termination of the T&D Agreement would most probably buttress bondholder's position.
- A receiver would be able to go to state court to exercise rights under the PREPA Trust Agreement and Enabling Act to obtain rate increases in amounts sufficient to pay PREPA's debt in full (as well as potentially restructure operations).
- Creditors will likely argue that LUMA is the ideal candidate to act as receiver, which would put control of the T&D System back in LUMA's hands, even after the termination of the T&D Agreements.
- To the extent that LUMA is owed a termination payment of approximately \$121,785,000, not only would PREPA's liabilities increase, but LUMA's termination fees would be entitled to administrative expense treatment and would therefore be paid ahead of PREPA's existing creditors, which would further exacerbate challenges for PREPA's planned Title III exit and likely increase calls for rate increases.

Increased Uncertainty Regarding Federal Funding.

- Termination of the T&D Agreements would likely increase uncertainty with respect to federal funding. The Federal Emergency Management Agency and United States Department of Housing and Urban Development have consistently indicated a greater willingness to allocate funds to Puerto Rico's energy recovery if assets are operated and managed by private parties rather than by PREPA.
- Any disruptions to the availability or timing of federal funding will likely freeze or significantly delay capital improvements to the T&D System. Federally funded projects for the T&D System would suffer delay or a complete halt.

Considerations Regarding the IRP and Rate Orders.

- Termination of the T&D Agreements would disrupt the energy transformation benchmarks set in the current IRP, which factored in the existence of a private operator for the T&D System, and divert funds toward paying the Operator Termination Fee and Back-End Transition Service Fee.
- Termination of LUMA as operator of the T&D System would shroud the next IRP, which is scheduled to be filed in 2023 (the "2023 IRP"), in uncertainty, thereby diminishing the utility of the plans set forth therein.

- LUMA would remain responsible for preparing the 2023 IRP during the Back-End Transition, meaning the 2023 IRP would be prepared by a recently-removed entity with limited incentive to thoughtfully plot a course for Puerto Rico's energy future. This is to say nothing of the logistical turmoil that would ensue if LUMA's obligation to perform Back-End Transition Services (which only lasts for up to one year) were to expire in the middle of PREB hearings on the 2023 IRP.
- The fees associated with terminating the T&D Agreements would likely spur PREB to issue a new Rate Order.
- Until a new operator for the T&D System is procured, LUMA would represent PREPA in any proceedings stemming from such Rate Order, which could be acrimonious given the circumstances of an early termination and could bring complications to the Government's goal of transforming Puerto Rico's energy system.

PIETRANTONI MENDEZ
& ALVAREZ LLC

November 28, 2022

MEMORANDUM TO: Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority

RE: P3 Authority Approval Requirements for the Extension of the Interim Period Termination Date under the Puerto Rico Transmission and Distribution System Supplemental Terms Agreement

This memorandum discusses the approvals required from the Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority (the "P3 Authority") to extend the term of the Puerto Rico Transmission and Distribution System Supplemental Terms Agreement (the "Supplemental Agreement"), dated as of June 22, 2020, by and among the Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA"), as owner, the P3 Authority, as administrator, and LUMA Energy, LLC and LUMA Energy ServCo, LLC (collectively, "LUMA").

I. Background

On June 22, 2020, PREPA, the P3 Authority and LUMA executed (i) the Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement (the "O&M Agreement"), under which LUMA is responsible for providing operation and maintenance services related to Puerto Rico's transmission and distribution system ("T&D System") and (ii) a Supplemental Agreement, establishing certain special provisions applicable during an interim period (the "Interim Period") while PREPA's debt restructuring process under Title III of the Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act is ongoing.

LUMA began operations of the T&D System pursuant to the Supplemental Agreement on June 1, 2021, with the Interim Period beginning on such date and expiring on November 30, 2022 (the "Interim Period Termination Date").¹ Section 7.1 of the Supplemental Agreement provides that the Supplemental Agreement and the O&M Agreement shall automatically terminate without further action by LUMA, and without need for a court decision or arbitral award confirming such termination, in the event that PREPA's debt restructuring process has not concluded on or prior to

¹ Pursuant to Section 2.4 of the Supplemental Agreement, the Supplemental Agreement is in effect from its Effective Date (that is to say, from June 1st, 2021) through the earlier of (a) the Service Commencement Date and (b) the Interim Period Termination Date (such period of time, the "Interim Period"), unless earlier terminated in accordance with the terms thereof. It shall be a Service Commencement Date Condition that the Title III exit shall have occurred and that the Title II Plan and order of the Title III Court confirming same shall be reasonably acceptable to LUMA, among other conditions.

the Interim Period Termination Date, *provided that* such date may be extended, if requested by the P3 Authority, by agreement between the “Parties” (defined as PREPA, LUMA and the P3 Authority).

PREPA’s debt restructuring process has not concluded and is not expected to conclude by the Interim Period Termination Date. The parties desire to extend the Interim Period Termination Date. Below is the process by which such extension should be approved by the P3 Authority.

II. Applicable Law

A. Act 29

1. *General.*

Act No. 29-2009, as amended (“Act 29”), sets forth the process for the establishment of public-private partnerships (“P3s”) in Puerto Rico. The P3 Authority is the government entity responsible for identifying, evaluating, selecting and negotiating the terms of such P3s and their respective partnership contracts (the “P3 Agreements”). The P3 Authority is governed by a Board of Directors (the “P3 Board”) comprised of five (5) members, two (2) of which are appointed by the Governor as representatives of the public interest, based on a shortlist provided by the Presidents of the Puerto Rico Senate and House of Representatives.²

As originally enacted in 2009, Section 5(c) of Act 29 provided that the P3 Board’s quorum would be constituted with 4 out of the 5 P3 Board members and required that all decisions or actions be approved by an “extraordinary majority” of 4 members, including both representatives of the public interest. Such provision, however, was amended by Act No. 95-2017 to eliminate the extraordinary majority and public interest member approval requirements. Section 5(c) of Act 29 currently provides that the quorum of the Board of Directors of the P3 Authority is constituted by a simple majority of its members for all purposes, decisions and agreements, and does not require the approval of the representatives of the public interest. Therefore, all actions and decisions of the P3 Authority, subject to one limited exception discussed below, may be approved by the affirmative vote of the majority of the members of the P3 Board, which majority need not include the representatives of the public interest.

2. *Approval of P3 Agreements.*

Pursuant to Section 9(g) of Act 29, once the partnership committee (the “Partnership Committee”) has selected the winning proponent and completed the negotiation of the P3 Agreement, the Partnership Committee is required to prepare a report describing the procurement process and the reasons for the selection of the winning proponent (the “Partnership Report”). Pursuant to Section 9(g)(iii) of Act 29, the Partnership Report and the P3 Agreement must then be

² Section 5(b) of Act 29.

submitted to the Boards of Directors of the P3 Authority and the partnering government entity for approval. The Partnership Report and the P3 Agreement are then required to be submitted to the Governor for final approval. Once all approvals have been obtained, the selected proponent and the partnering government entity execute the P3 Agreement. Ordinarily, the P3 Authority is not a party to the P3 Agreement.

3. Amendments to P3 Agreements.

Pursuant to Sections 10(a)(x) and 10(b)(ix) of Act 29, P3 Agreements must include provisions regarding the amendment and extension of such contracts, respectively. Accordingly, amendments or extensions of P3 Agreements are subject to the amendment and extension provisions set forth in such contracts, and not to any special statutory requirements.

B. Act 120

Act No. 120-2019, as amended ("Act 120"), authorizes the P3 Authority to carry out P3s for any function, service or facility of PREPA (each, a "PREPA Transaction"). Section 10(a) of Act 120 provides that the procurement process and the selection of proponents for PREPA transactions shall be made pursuant to the processes set forth in Act 29.

III. Discussion

Pursuant to Sections 10(a)(x) and 10(b)(ix) of Act 29, P3 Agreements must include provisions regarding the amendment and extension of such contracts, respectively. Therefore, P3 Agreements are subject to the amendment and extension provisions set forth in such contracts, and not to any special statutory requirements under Act 29. Act 120 does not include specific requirements regarding the approval of amendments or term extensions for PREPA Transactions. Further, Section 4 of Act 120 specifically provides that all provisions of Act 29 shall apply to PREPA Transactions, except as otherwise provided in Act 120. Therefore, P3 Agreements relating to PREPA Transactions (including the O&M Agreement), like all other P3 Agreements, may be amended or extended in accordance with the amendment or extension provisions set forth in the contract, as provided in Act 29.

As discussed above, the P3 Authority is generally not a party to P3 Agreements. Such agreements are usually executed between the selected proponent and the participating government entity and provide that they may be amended by the parties thereto. This means that P3 Agreement amendments and/or extensions are generally not subject to the approval of the P3 Authority. Act 120 did not require that the P3 Authority act as administrator of the O&M Agreement, nor did it otherwise require that the P3 Authority be a party to such agreement or to any amendment thereof. Rather, during the contract negotiation process, the parties determined that it would be convenient for the P3 Authority to have certain rights and responsibilities under the contract that would ordinarily correspond to the partnering government entity, and P3 Authority assumed the role of administrator. This role is separate and distinct from its role as the public procurement entity for P3s and is not contemplated by Act 120.

Pursuant to Section 7.1 of the Supplemental Agreement, the Interim Period Termination Date may be extended, if requested by the P3 Authority, by agreement of the "Parties." As defined

in the O&M Agreement and the Supplemental Agreement, the term “Parties” includes the P3 Authority. Therefore, the extension of the Interim Period Termination Date requires the approval of the P3 Authority.

Pursuant to Act 29, the P3 Authority’s powers are exercised through the P3 Board, which may generally approve actions and decisions by majority vote except as provided under Act 120 with respect to the procurement process of a PREPA Transaction.³ Act 120, however, does not require that every single decision or action by the P3 Board related to a PREPA Transaction be approved by the representatives of the public interest. Actions by the P3 Board relating to PREPA Transactions, other than the initial approval of the Partnership Report and the P3 Agreement pursuant to Article 9(g)(iii) of Act 29, are not subject to the requirement of Section 10(b) of Act 120 and, therefore, may be approved by a simple majority of the P3 Board in accordance with Act 29.

The P3 Board (including the representatives of the public interest) approved the O&M Agreement prior to its execution pursuant Article 9(g)(iii) of Act 29 and Section 10(b) of Act 120. The approval by the P3 Authority of the extension of the Interim Period Termination Date under the Supplemental Agreement is not an approval by the P3 Board pursuant to Article 9(g)(iii) of Act 29. Therefore, the requirement of Section 10(b) of Act 120 that the approval of the P3 Board under Article 9(g)(iii) of Act 29 include the affirmative vote of the representatives of the public interest does not apply to the P3 Board’s approval of the extension of the Interim Period Termination Date. This is also supported by the fact that the P3 Authority’s approval of the extension is required solely due to the fact that it is a party to the O&M Agreement and the Supplemental Agreement in its capacity as administrator, which is a role that is not contemplated by Act 120. In other words, the P3 Authority’s approval for the extension is required by the O&M Agreement itself, not by Act 29 or Act 120. The special approval requirements of Section 10(b) of Act 120 should not be interpreted to apply to an approval that is not even contemplated by Act 120. As a result, we understand that the affirmative vote of a majority of the members of the P3 Board in accordance with Section 5(c) of Act 29 would be sufficient to authorize the extension of the Interim Period Termination Date.⁴

³ Specifically, Section 10(b) of Act 120 provides that, notwithstanding the provisions of Article 5(c) of Act 29, the approval of the P3 Board under Article 9(g)(iii) of Act 29 shall require the affirmative vote of both representatives of the public interest. Article 9(g)(iii) of Act 29 refers to the P3 Authority’s approval of the Partnership Report and the P3 Agreement upon conclusion of the procurement process and the selection of the winning proponent. Consistent with this requirement, the O&M Agreement was approved by the P3 Board, with the affirmative vote of the representatives of the public interest.

⁴ Section 9.5 of the Regulation for the Procurement, Evaluation, Selection, Negotiation and Award of Participatory Public-Private Partnership Contracts under Act No 29-2009, as amended (the “Regulation”), provides that all agreements related to or necessary for the performance of a Partnership Contract or the implementation of a Partnership must be approved by the P3 Authority. Unlike other provisions of the Regulation, Section 9.5 does not specifically provide that such agreements must be approved by the P3 Board. While an argument could be made that the extension of the Interim Period Termination Date may be approved by the Executive Director of the P3 Authority (acting on behalf of the P3 Authority under the general authority delegated to the Executive Director by the P3 Board, Act 29 and the Regulation), without need for P3 Board approval, the extension of the Interim Period Termination

IV. Conclusion

Since the approval of an extension of the Interim Period Termination Date does not involve the initial approval of a PREPA Transaction under Article 9(g)(iii) of Act 29, we understand that the affirmative vote of a majority of the members of the P3 Board in accordance with Section 5(c) of Act 29 would be sufficient to authorize the extension of the Interim Period Termination Date.

Date is a material decision and a matter of high public interest and, therefore, it is advisable to submit this matter for approval by the P3 Board.